

HAROLDO DILLA (1952). Graduado de Profesor de Historia. Investigador del Área del Caribe en el CEA.

Autoritarismo y democracia en el Caribe:
el mensaje de los 80

Al calor de la profunda crisis socioeconómica y de la intensificación de la lucha de clases, el agotamiento de los proyectos democrático-liberales caribeños obliga a la búsqueda de alternativas políticas populares

INTRODUCCIÓN

Hasta muy avanzado el siglo actual, el Caribe¹ era conocido no sólo por sus bellezas naturales, sus ritmos contagiosos y sus economías “de postre”, sino también por sus tenebrosas dictaduras militares y sus autocráticos regímenes militares.

Más de una decena de países coloniales —incluyendo algunos de tamaño y/o población considerables como Jamaica, Trinidad y Guyana— constituían parte del imperio colonial británico y eran regidos por un riguroso dominio directo de la Corona. Francia mantenía una presencia directa sobre algunas islas y el espacio continental de Cayena, mientras los Estados Unidos consolidaban su dominación sobre la isla de Puerto Rico a través de fórmulas políticas esencial y formalmente colonialistas, tales como la Ley Foraker y la Ley Jones. Los remanentes del poder de los antaño “carreteros del mar” se materializaban en el control directo de Holanda sobre algunas pequeñas islas y sobre el actual Suriname.

Sólo tres países podían considerarse formalmente independientes: Haití, República Dominicana y Cuba. Haití vivió un período de profunda inestabilidad sociopolítica hasta 1915, año en que el país fue ocupado durante dos décadas por los marines norteamericanos, tras lo cual se abrió un período de inestables momentos de cierto ordenamiento democrático y férreas dictaduras altamente represivas que se prolongan hasta la actualidad.

República Dominicana sufrió igual suerte que su vecina; sólo que aquí la ocupación norteamericana duró ocho años y fue sucedida casi inmediatamente por la dictadura de Trujillo, una de las más largas y horrendas que ha conocido este continente. Cuba, que aparentemente gozó de una mayor estabilidad

¹ Cuando hablamos aquí de Caribe nos referimos sólo al espacio antillano, las Guayanas y Belice, aun cuando en el curso de estas notas no tratemos a todos los países que lo componen sino sólo a aquellos que siguen una línea de evolución afín al tema tratado. Cuando nos referimos a Cuenca del Caribe, incluimos también a los países circundantes; principalmente Centroamérica.

política, sufrió, entre el momento de su arribo a la independencia tras la primera ocupación norteamericana (1902) y el inicio de la dictadura de Gerardo Machado (1925), un total de dos guerras partidistas, una ocupación militar de tres años e innumerables desembarcos parciales de marines e injerencias norteamericanas amparadas por la Enmienda Platt, así como cuantiosos fraudes que tensaban la atmósfera política republicana. Un socialista español, Lous Araquistáin, que nos visitó en la tercera década del siglo, no pudo menos que evaluar con cariñosa decepción una realidad de “decadencia política y social” que resumió en una frase: *la agonía antillana*. A partir de los años 50, sin embargo, la situación política de la región comenzó a cambiar, tanto en las formas como en el contenido de la dominación imperialista y de clases. En un primer sentido, la hegemonía norteamericana se extendería hacia los países sometidos colonialmente por países europeos, desplazando en grados diferentes a las antiguas metrópolis, lo que iría acompañado de sustanciales remodelaciones de las economías capitalistas dependientes y de las estructuras de clase correspondientes al interior de los países caribeños. Ello se reflejaría también en las estructuras políticas de estos países. Así, en las colonias inglesas se inició el proceso de descolonización formal, primero mediante la instauración de regímenes autonómicos y posteriormente de status independientes con estructuras políticas democrático-liberales.² En República Dominicana, tras la liquidación física de Trujillo y el derrumbe de su régimen en 1961, se sucedió una cadena de golpes de Estado, un breve gobierno democrático y el ascenso del movimiento popular hasta su culminación en la insurrección de 1965, aplastada por las tropas norteamericanas. A partir de aquí se establece una semidictadura que concluirá en 1978 con una apertura democrático-liberal significativa. En Cuba la dictadura de Machado —derrocada en 1933 por un fuerte movimiento popular—, fue seguida por más de un lustro de gobiernos militares hasta 1940, en que se inaugura un período democrático-liberal fraudulento, represivo y frustratorio de las expectativas populares. En 1952 se produce otro golpe de Estado encabezado por Fulgencio Batista, quien a su

² El término “democracia liberal” lo tomamos directamente de Maurice Duverger, en cuanto a la caracterización institucional que este precisa en tres aspectos: elección de los gobernantes mediante el sufragio universal, estructura de gobierno basada en el pluralismo político y la separación de poderes y existencia de un marco de libertades públicas. (Véase: Maurice Duverger: Instituciones políticas y derechos constitucionales. Colección Demos. Ediciones Ariel, Barcelona. 1982. p. 69). Sin embargo, a esta definición es imprescindible agregar que las democracias liberales constituyen las formas sofisticadas y enmascaradas de la dictadura de la burguesía sobre las masas trabajadoras, y en esa medida sus libertades públicas formales son el resultado —y a la vez válvula de seguridad— de las fuertes contradicciones fundamentales y no fundamentales que aquejan a las sociedades capitalistas

vez fue derribado en 1959 por una insurrección popular. A partir de este momento se inaugura en la mayor de las Antillas un nuevo sistema político acorde con un profundo proceso de transformaciones revolucionarias. Este sintético recuento no pretende demostrar que el fenómeno democrático-liberal sea mayoritario o predominante en el espacio caribeño. Desde el punto de vista poblacional, por ejemplo, hacia principios de los 80 sólo el 35% de los habitantes del área estaban regidos por esta forma de sistema político. Fuera de esta denominación quedan países independientes con otros tipos de regímenes políticos. De igual manera, debemos recordar que aún hoy cerca del 15% de la población permanece sometida a la dominación colonial. Aun cuando estos regímenes coloniales hayan sido disfrazados con fórmulas autonomistas o asimilacionistas tales como el Estado Libre Asociado en Puerto Rico o la departamentalización en las posesiones francesas (lo que de hecho introduce ciertos elementos del rejuego democrático liberal), este se ve fundamentalmente coartado por la imposibilidad de constituir un Estado nacional mediante la decisión soberana del pueblo sin limitaciones ni injerencias externas.

Sin embargo, si nos atenemos a criterios cualitativos, el problema de la democracia adquiere una importancia mayor. La existencia en la Cuenca del Caribe de una democracia socialista y la emergencia de otras formas de democracia revolucionaria en Granada (hasta octubre de 1983) y en Nicaragua, sitúan la discusión teórica acerca de la democracia liberal en un plano de alto significado político. Al dilema planteado por el imperio de dos “futuros” posibles para el área caribeña —“ya el establecimiento o restauración de gobiernos constitucionales moderados, con crecimiento y mejor nivel de vida o... la imposición de dictaduras e inevitablemente mayor decadencia económica y sufrimiento humano”— debe oponerse una crítica profunda a las “democracias funcionales”³ del Caribe, no atendida únicamente a sus aspectos formales sino dirigida a sus propias bases, a los mecanismos que permiten el rejuego liberal sobre unas sociedades cuyos índices de injusticias sociales y depauperación de las mayorías se sitúan entre los primeros lugares del continente. Se trata, en pocas palabras, de rebasar el interés meramente académico y de provocar la inserción del debate en una perspectiva político-ideológica de crucial importancia para nuestros pueblos en su marcha hacia la liberación social y nacional.

³ Discurso de Ronald Reagan ante el Consejo de la OEA el 24 de febrero de 1982, Editora Política, la Habana, 1982, p. 12.

LAS BASES DE LAS DEMOCRACIAS LIBERALES CARIBEÑAS

Las democracias liberales en el Caribe, como las propias sociedades que las engendran, nacen deformadas y viciadas, sujetas a un orden desnacionalizador y sometidas a un pronunciado constreñimiento social.

En su génesis pudiéramos señalar dos factores claves: la modernización de las estructuras socioeconómicas y la mediación imperialista. Como es conocido, en los países aquí analizados tuvo lugar un proceso de desarrollo del capitalismo dependiente sobre la base de la industrialización ligera sustitutiva de importaciones y de inversiones en la minería (lo que reprodujo el enclave monopolista), el turismo, las finanzas, etc. Aunque limitado en sus alcances y con un efecto deformante y desnacionalizador, este proceso coadyuvó a la modernización de la estructura de clases y al crecimiento de la población urbana. En este sentido, el crecimiento económico permitió la emergencia y la cooptación de un sector de capas medias (propietarias y no propietarias) encargadas de dirigir y sostener el proceso político mediante su presencia directa en la administración del Estado, en las jerarquías partidistas y de los grupos de presión y en los medios de difusión masiva, autoerigiéndose como símbolo y meta de la prosperidad a través de un mensaje alienante y políticamente muy conservador.

Por otra parte, es interesante anotar el papel de la mediación imperialista. Aunque sería erróneo afirmar que la política del imperialismo en el Caribe haya estado dirigida al fomento de este tipo de régimen político, lo que sí no se puede obviar es que dentro de su política pragmática y consecuente con sus fines de dominación, el imperialismo ha sido un factor clave en la instauración de las democracias liberales allí donde estas se han mostrado como los proyectos políticos idóneos para la reproducción del capitalismo dependiente. La mediación imperialista ha estado presente en la conformación de los regímenes *westminsterianos* en el Caribe anglófono y en la instauración de la democracia representativa en República Dominicana, lubricando sus mecanismos de control social político y militar y reprimiendo con celo agresivo cualquier disidencia, siquiera parcial, de sus pretensiones geopolíticas.

A partir de aquí, las democracias liberales caribeñas adoptan formas diferentes de acuerdo con las peculiaridades históricas nacionales.

La forma democrático-liberal más extendida en el Caribe es el llamado sistema *Westminster*, presente, con variaciones locales, en los países anglófonos del área. Aquí los sistemas políticos imitan instituciones y funcionamientos de la antigua metrópoli y fueron paulatina y cuidadosamente modelados durante varios lustros de tutelaje autonómico, lo que permitió “a los fundadores de la constitución reproducir el modelo original (*Westminster*)

con las imperfecciones que incidían en su propio interés”,⁴ al mismo tiempo que las élites políticas eran sometidas a un intenso entrenamiento, liquidados los grupos de izquierda emergidos de las revueltas populares de los 30 y configurado un rígido esquema de dominación social.

De forma general, el sistema político se estructura a partir de un gabinete ejecutivo encabezado por un Primer Ministro y un poder legislativo bicameral, pero donde sólo la Cámara Baja tiene un papel político activo, al menos hasta donde lo permite la perfecta identificación entre el partido, el gobierno y la mayoría parlamentaria. El gobierno es sorteado electoralmente cada cinco años mediante sufragio universal. El sistema de partidos es generalmente bipartidista (Barbados, Jamaica) o de un partido dominante (Trinidad, Guyana) y, con excepciones, muy poco polarizado.

A partir de ellos se estructuró una serie de controles sobre las organizaciones populares —sindicatos, grupos juveniles y femeninos—, cooptándoles e integrándoles rígidamente a los mecanismos del sistema.

Ciertamente, el régimen *westminsteriano* se ha mostrado eficaz en su misión de subordinar las masas al sistema, e incluso en la cooptación de incipientes movimientos populares en proceso de autonomización.

Así, se presenta al observador un cuadro de estabilidad y regularidad política que contrasta con las turbulencias de sus vecinos latinoamericanos.

Esta diferencia, sin embargo, no reside en una conformación diferente del capitalismo dependiente, ni en la existencia de un proyecto económico que permita a las clases dominantes el uso de un amplio excedente para mitigar las graves contradicciones sociales. Los mismos factores básicos que condicionan a unas están presentes en la otra. Sólo que en el Caribe anglófono el sistema político —como ya anotamos— fue eje de un paulatino y esmerado proceso de modelación por parte de la metrópoli, al mismo tiempo en que aquí las masas populares sufren de un nivel de cultura política muy bajo, carentes de experiencias democrático-revolucionarias sostenidas y atenazadas por nocivas divisiones étnicas y culturales que el propio sistema se encarga de alimentar. Paralelamente, la violencia institucional que se ejerce a partir de los rígidos sistema partidistas y de otros mecanismos legales, cierran el camino a opciones revolucionarias y obstaculizan la autonomización de las expresiones populares. Debajo del manto liberal prospera un tramado autoritario y alienante que reduce la participación popular a las consecuencias electorales y la entrega de un voto que Hilbourne Watson definía a partir de la existencia de

⁴ Trevor Munroe: *The Politics of Constitutional Decolonization*. ISER. UWI. 1972. p. 117.

“una conciencia existencial, un consenso aletargado y pasivo canalizado por el patronazgo y el clientelismo políticos.”⁵

En los países hispanoparlantes —República Dominicana y Cuba antes de 1959— la democracia liberal adoptará el típico patrón latinoamericano de un régimen presidencialista con Parlamento generalmente bicameral, elecciones cada cuatro años por sufragio universal, un sistema de partidos inestable y poco disciplinado y una presencia efectiva de las fuerzas armadas como condicionadoras del poder civil. Sin embargo, más que estas diferencias formales, lo que nos interesa recalcar es que en el Caribe hispanoparlante el mayor nivel de cultura política de las masas —avalado por una experiencia revolucionaria y patriótica más intensa y en consecuencia una mayor propensión a la autonomización de sus expresiones, o al menos, a desbordar los estrechos marcos del sistema—, ha actuado como una cuña que impide la maduración de los proyectos democrático-liberales y genera un ciclo de pálidas aperturas democráticas y dictaduras o semidictaduras militares, con usos más frecuentes y abiertos de los mecanismos represivos violentos. En este sentido, la apertura democrática en Cuba en la década de los 40 estuvo íntimamente ligada a la derrota y desarticulación momentánea del movimiento revolucionario de los 30, de la misma manera que el golpe militar de 1952 y la incapacidad del sistema para producir una salida democrático-liberal a la situación creada posteriormente estuvo determinada en buena medida por el nuevo flujo del movimiento popular; primero enmarcado en la opción progresista del Partido Ortodoxo, y más tarde plenamente desarrollado en la insurrección armada dirigida por el Movimiento 26 de Julio y por otras organizaciones revolucionarias. En el mismo sentido, la apertura democrática de 1978 en República Dominicana sólo fue posible tras el conocido desenlace de 1965 y de la sangrienta ola represiva que sufrió el país en los años siguientes.

La serie de factores mencionados —la extrema debilidad de sus bases materiales y sociales, su estrecha ligazón con un orden desnacionalizador, su frecuente recurrencia a represiones violentas y otras prácticas deslegitimizadoras— condenan a las democracias liberales caribeñas al congelamiento y a la regresión, pues su pobre dinámica interna, operando sobre un medio social muy explosivo, determina que su reproducción esté en relación directa con la no participación política y engendra, en un círculo

⁵ Cfr. Hilbourne Watson: “Populismo y movimientos populares en el Caribe angloparlante”, En El Caribe Contemporáneo. no, 2. mayo-junio de 1980.

vicioso enajenador, lo que Maingot denomina —invirtiendo los términos de la explicación— “el espíritu conservador” del hombre caribeño.⁶

La experiencia de los 70 ilustra claramente que aquellos intentos de ampliar la participación popular en los procesos políticos caribeños, aun dentro de los marcos del sistema, sufrieron la ruda oposición de importantes sectores de las clases dominantes, del imperialismo, las derechas políticas locales y otros factores de poder.

Quizás el ejemplo más elocuente de un proyecto de ampliación democrático-liberal en el contexto caribeño fue el programa nacional-reformista practicado por el People's National Party (PNP) en Jamaica bajo la dirección de Michael Manley. Pertrechado de una visión política de corte socialdemócrata, el PNP intentó reformar los aspectos más gravosos del crecimiento capitalista dependiente en Jamaica mediante ciertos mecanismos redistributivos de los ingresos, participación estatal en la economía, la aplicación de medidas nacionalistas y antimperialistas en pos de la captación de un mayor excedente económico y la ampliación de la participación popular en el proceso político. A pesar de no ser un proyecto anticapitalista, la gestión nacional-reformista captó rápidamente la oposición de los sectores burgueses más importantes y fue duramente combatida por la oposición derechista y por el imperialismo, el medio de una violenta campaña de desestabilización que culminó con el “derrocamiento electoral” de Manley en octubre de 1980.

Es interesante anotar que desde mediados de 1980 la oposición controlaba no sólo las instancias principales de la sociedad civil (medios masivos de difusión, Iglesia, etc.) sino también y sobre todo “el monopolio de la represión”, las fuerzas armadas y de seguridad, las cuales, según Manley, “estaban abiertamente alineadas con el Partido Laborista de Jamaica y frecuentemente intimidaban a nuestros partidarios”.⁷

De hecho, se había creado una situación ilegal donde el gobierno elegido estaba totalmente aislado e incapacitado, por su propia esencia de clase, para una movilización más efectiva de las masas que enfrentara el proceso de desestabilización. El 9 de octubre Michael Manley sufrió un atentado, al igual que su ministro de Seguridad, Duddley Thompson, y el día 14 fue asesinado

⁶ Cfr. Anthony Maingot: “las implicaciones de lo moderno y lo conservador en el pensamiento político antillano”. En *Revista Occidental*: septiembre-diciembre de 1983. Tijuana. México.

⁷ Michael Manley: *Jamaica: Struggles in the Periphery*. Third World Media Limited, London, s/f. p. 82.

en la calle por un agente policiaco el viceministro de Seguridad, Roy Mac Gan.

Estaba planteada claramente una salida golpista en caso de que Manley resultara vencedor, y ya en junio se había producido una intentona puschista aislada. En octubre Manley fue derrocado electoralmente y el nuevo gobierno desató una activa represión contra el movimiento progresista mediante bandas paramilitares y fuerzas de la policía y el ejército. El infalible liberalismo westminsteriano se volvió contra el avance de la democracia y aplastaba, violando sus propios preceptos jurídicos, una opción política progresista que desbordaba sus estrechos cauces.⁸

La experiencia jamaicana demostró que más allá del juego de las apariencias, más allá de las voluntades políticas, las formas democrático-liberales en el Caribe encierran un tramado autoritario que garantiza las rudas particularidades de la acumulación capitalista en el área, la dictadura clasista de una burguesía miope y objetivamente limitada y el peso agobiante de la dominación imperialista, e impiden la expansión y reproducción de la participación popular en el marco del capitalismo dependiente.

EL MENSAJE DE LOS 80

El desenlace del proceso jamaicano en octubre de 1980 no fue un hecho aislado, sino el más relevante eslabón de una cadena de sucesos políticos que vienen indicando la paulatina obsolescencia de las prácticas democrático-liberales en la estrategia de dominación burguesa e imperialista en el Caribe. Triunfos electorales de las opciones más derechistas; actos de fuerza gubernamentales contra libertades públicas; elecciones amañadas y preñadas de manifestaciones de violencia que han conducido incluso a parlamentos unipartidistas en Jamaica y Antigua; exacerbación de la propaganda anticomunista y de la represión contra el movimiento popular; campañas contra organizaciones regionales progresistas; legislaciones sobre temas de “seguridad nacional”, todo ello enmarcado en la coordinación regional de las fuerzas reaccionarias en una “Santa Alianza” agresiva bajo la tutela directa del imperialismo norteamericano, denuncian una clara tendencia hacia el predominio más descarnado de los métodos autoritaristas y represivos de control sociopolítico. Más que una descripción de este proceso, lo que nos interesa es señalar cuáles son, a nuestro juicio, las

⁸ Cfr. Varios: Crisis, proceso político y alternativas en la sociedad jamaicana actual. Avances de Investigación no. 19. CEA. La Habana, abril de 1983.

causas que lo determinan, cuál, por tanto, es su significado real más allá de lo coyuntural y, por último, cómo se manifiesta en sus formas más generales. La primera causa de esta tendencia política reside en la serie de ajustes socioeconómicos de inspiración neoliberal que sufren la mayor parte de los países caribeños y a través de los cuales se pretende superar el agotado modelo sustitutivo de importaciones por un esquema de producciones exportadoras en función del capital transnacional, asidas a los incentivos de la llamada “Iniciativa para la Cuenca del Caribe” y bajo el control directo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Estos ajustes tienen notables incidencias sociales, principalmente en lo relativo a una redefinición más estricta de la renta nacional en beneficio de la ganancia capitalista, del papel del Estado como agente económico y de las relaciones interburguesas, por cuanto implican una purga parcial del capital ineficiente, precisamente el capital mediano, que había prosperado sobreprotegido por el Estado durante el auge de las políticas desarrollistas. Dicho de forma más concreta, se trata, en primer lugar, de la entronización de una política económica restrictiva del consumo popular en favor de la acumulación mediante reducción del salario real y/o congelaciones del nominal, austeridad presupuestaria gubernamental en perjuicio de los servicios sociales y de la capacidad empleadora del sector público, detención de todo esquema redistributivo de los ingresos que ponga en duda la “continuidad de las políticas” favorables a la propiedad privada, etc.

Al mismo tiempo el Estado desarrollista “para toda la burguesía”, propio de los períodos de activo crecimiento económico, cede su lugar al Estado neoliberalizante, penalizador de sectores burgueses menores y de fracciones incapaces de ubicarse en el marco de un fuerte y desigual clima competitivo, en la dinámica axial de los procesos económicos. La serie de contradicciones que se agudizan a partir de estos ajustes —contradicción fundamental entre el capital y el trabajo, contradicciones interburguesas, descontento de los sectores medios profesionales e intelectuales— conducen a una paulatina obsolescencia de los medios democrático-liberales de control social y potencian las expresiones más autoritarias dentro del sistema político. O sea, que la propia autorreproducción del capitalismo dependiente en el Caribe tiende a agudizar las contradicciones que limitaron la participación popular y un ordenamiento consensual más amplio de las democracias liberales, al mismo tiempo que erosiona las bases sociales que les proporcionan las débiles cuotas de consentimiento político.

No se trata de un mero ajuste coyuntural, sino de un ordenamiento socioeconómico a largo plazo que exige una recomposición autoritaria del poder burgués para desarrollar un esquema de acumulación capitalista

esencialmente diferente al que había predominado hasta entonces y que torna anacrónicos los breves espacios democráticos que sirvieron de cobertura legal al desarrollo del aún incipiente movimiento popular. Ello se agrava más si tenemos en cuenta que el proceso descrito tiene lugar en medio de una grave recesión de la economía capitalista mundial y donde la dudosa recuperación de los centros imperialistas se produce al costo de la efectiva depauperación de las economías periféricas.

Partiendo de estas consideraciones es posible indicar la existencia en algunas democracias liberales caribeñas —y particularmente en Jamaica y República Dominicana— de una visible tendencia hacia la tecnocratización y militarización del sistema político, un proceso en ciernes de similares características a lo que Marini ha denominado “Estado corporativo del gran capital”.⁹ En primer lugar, la necesidad de instrumentar una política económica más estrictamente en función del gran capital local e imperialista, sin la interferencia de las díscolas burocracias políticas siempre dispuestas a proyectos de corte populista y a su realización sectorial, ha sido cubierta mediante la ocupación de las “palancas de mando fundamentales” del aparato económico estatal por figuras provenientes o intelectuales orgánicos del gran capital. Es interesante anotar que en Jamaica la influyente “vieja guardia” laborista ha sido relegada a puestos públicos sin relación directa con la política económica, y que esta haya quedado en manos de la claqué más cercana a Seaga, en su mayor parte cuadros de las 21 familias y del capital transnacional y sin vinculaciones con el movimiento sindical. En idéntico sentido, el “Consejo Nacional de Hombres de Empresa”, en República Dominicana, suministró las figuras para los puestos económicos claves del país, principalmente en la esfera monetaria, mecanismo central para los ajustes neoliberales en el área.

De esa manera, el presidente Salvador Jorge Blanco quedó rodeado de figuras empresariales e intelectuales orgánicos directamente ligados al gran capital.¹⁰ Si la tecnocratización del Estado obedece a la necesidad de un control más estrecho de sus aparatos económicos en función del gran capital, la militarización es el complemento imprescindible para el control social en medio de las encarnadas contradicciones clasistas de cada sociedad y, en un plano regional, la amalgama de una alianza contrarrevolucionaria patrocinada por el imperialismo norteamericano contra el movimiento popular y

⁹ Cfr. Ruy Mauro Marini: “La cuestión del Estado en la lucha por el socialismo”. En *Pensamiento Crítico*. julio-agosto de 1910.

¹⁰ Este plan puede encontrarse explícitamente indicado en la estrategia del CNHE para las elecciones de 1982, publicado por *El Nuevo Diario* el 20 de enero de 1982. p. 6.

progresista. En este sentido, la militarización constituye el principal recurso de que disponen el imperialismo y las clases dominantes locales ante su incapacidad para ofrecer soluciones viables a la crisis económica y para conjurar por medios no violentos el paulatino pero inexorable ascenso del movimiento popular. Esto no significa que estemos en presencia de una inminente sucesión de golpes de Estado, lo cual ni es necesario —dado el carácter aún incipiente del movimiento popular en el área—, ni deseable por el imperialismo, para el que las proclamadas “democracias funcionales”, es decir, restringidas y altamente represivas ofrecen un marco legitimizador a sus “alianzas” internacionales.

Pero, de igual manera, la militarización introduce variaciones sustantivas en el funcionamiento político de las sociedades caribeñas, particularmente allí donde las fuerzas armadas y de seguridad habían tenido regularmente una discreta presencia pública como meros soportes del poder civil. La renovación tecnológica de las fuerzas armadas y de seguridad implica al mismo tiempo su modelación moral e ideológica en correspondencia con las necesidades del sistema; es decir, su conversión en cuerpo político condicionador del poder civil e incluso eventual depositario de ese poder. Los frecuentes contactos entre los altos mandos militares norteamericanos y sus homólogos caribeños, la proliferación de cursos de entrenamiento en Puerto Rico y otros lugares, la instalación de bases militares en Jamaica, el triste papel de Barbados como centro de la alianza militar del Caribe Oriental, la participación de militares caribeños en maniobras y en la artera invasión a Granada, constituyen indicios de este proceso, pero únicamente la punta del iceberg. Su impacto en los sistemas y el devenir político de los países caribeños, es aún un tema por explorar y que requiere la máxima atención futura de los especialistas.

En el plano de las relaciones intrarregionales, la invasión a Granada por tropas norteamericanas, pero con el pleno apoyo político y el simbólico aporte militar de seis países anglófonos, constituye un reflejo del proceso antes descrito y una enseñanza acerca de la limitada perdurabilidad de los mitos liberales. De un golpe fueron destruidos principios que parecían inviolables en la comunidad caribeña anglófona, tales como el pluralismo político-ideológico o los lazos étnicos-culturales por encima de cualquier diferencia irriterestatal, lo que se viene continuando en los ataques contra los gobiernos que se niegan a alinearse en la cruzada reaccionaria y en la propuesta —viejo anhelo de Seaga— de una alianza derechista pronorteamericana denominada CARICOM II. La invasión a Granada demostró también que, a pesar de los supuestamente arraigados escrúpulos liberales, las clases dominantes

caribeñas pueden preferir, como el “burgués jadeante” de la Francia de 1848, ¡antes un final terrible que un terror sin fin!¹¹

El agotamiento de las democracias liberales a merced de las necesidades de la acumulación capitalista; la incapacidad de las clases dominantes para contrarrestar los efectos de una crisis estructural y global de las sociedades caribeñas; los efectos devastadores de la crisis de la economía capitalista mundial y de los leoninos lazos de dependencia que atan las economías locales; la imposibilidad del sistema de cooptar al movimiento popular emergente y la frecuente recurrencia a métodos represivos, devienen hechos que plantean a las fuerzas progresistas y democráticas del área la búsqueda de alternativas que conduzcan a un verdadero y estable orden de justicia y paz. A partir de esta necesidad, la vida —mucho más rica que cualquier teoría gris— ha venido ofreciendo probables alternativas que en diferentes grados y maneras han logrado permearse de lo que ha sido denominado la lógica de las mayorías”. Como mencionamos con anterioridad, durante los años 70 irrumpieron en el área una serie de proyectos reformistas cuya máxima expresión fue la gestión del PNP en Jamaica. Aunque en cada país estos proyectos tuvieron matices y contenidos diversos, pudiéramos señalar algunos rasgos comunes, tales como la aplicación de mecanismos keynesianos de conducción económica (demanda inducida sobre la base del aumento de los gastos corrientes y del consiguiente déficit presupuestario); mayor intervención del Estado en la economía incluso en esferas productivas; acentuación de las movilizaciones populares como consecuencia de la necesaria alianza de las fracciones burguesas menores y sectores pequeño burgueses y la subordinación negociada de las masas populares; adopción de posiciones nacionalistas de matices antimperialistas tanto dentro de cada país (política de nacionalización en los enclaves monopólicos) como en las relaciones internacionales con la adopción de políticas exteriores tercermundistas y más activas e independientes.

Ciertamente, estos proyectos significaron pasos de avances, al contribuir al mejoramiento de los niveles de vida de la mayorías, agregar notas de distensión y convivencia pacífica, a la convulsa geopolítica del área y promover formas más amplias de participación política popular y de integración nacional, factores además muy importantes para naciones recién advenidas al concierto de los países independientes.

Sin embargo, sin perder de vista estos aspectos positivos, el desenlace final de estos proyectos nos mueve a realizar algunas consideraciones acerca de su

¹¹ Carlos Marx: “El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte”. En Obras Escogidas, tomo 1 Ed. Progreso, Moscú, s/f, p. 304.

actual viabilidad y de la capacidad que puedan tener para aportar soluciones a mediano o largo plazo.

En los 70, cuando la crisis económica era menos acentuada y la articulación contrarrevolucionaria entre el gran capital nativo, las derechas políticas y el imperialismo estaba menos consolidada, estos proyectos tuvieron que enfrentar una férrea oposición reaccionaria que los condujo a la bancarrota. Podiéramos preguntarnos cuáles son sus actuales posibilidades cuando la estrategia económica del gran capital local y transnacional está en plena marcha y el imperialismo ha logrado articular una “entente” con sus aliados nativos, dirigida a impedir cualquier opción que desafíe sus postulados económicos y sus directivas de alineación militarista y agresiva. Preguntamos: ¿cómo es posible escapar de los férreos dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI) o de las propuestas desnacionalizadoras e injerencistas de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) sin una ruptura radical con las exigencias de la banca transnacional, más allá de una mera retórica en los foros internacionales? ¿Cómo es posible congeniar las necesidades más elementales de las masas con las necesidades cada vez más excluyentes de la acumulación en medio de un excedente económico exiguo y menguante? ¿Cómo es posible enfrentar la oposición de los sectores más concentrados del capital, de sus aliados políticos y militares locales y del imperialismo con los mecanismos que ofrece el sistema democrático liberal; es decir, con los mecanismos que orgánicamente pertenecen precisamente a los opositores? En resumen, ¿es posible introducir un ordenamiento más racional al sistema a partir de un control sobre ciertos mecanismos gubernamentales sin variar la propia composición social del Estado? La experiencia del proceso dominicano a partir de agosto de 1982 es harto ilustrativa. Salvador Jorge Blanco, una figura liberal con amplio apoyo popular y el apoyo de figuras carismáticas y de vocación democrática dentro de su partido, se ha visto obligado a una práctica económica, social y política totalmente diferente a la que muchos pronosticaban, y ha perpetrado una de las matanzas más horrendas en la historia nacional.

El dilema de la democracia en el Caribe no estriba únicamente en discusiones técnicas acerca de cómo distribuir el excedente restante de la acumulación capitalista o del grado de intervención del Estado en la economía. El problema no reside en la defensa de la democracia liberal —si bien tácticamente es importante la preservación de los magros espacios legales para la acción del movimiento popular— sino en la transformación sustancial de sus bases socioeconómicas y su superación por una democracia real basada en el consenso activo de las masas y una creciente participación popular. Es una cuestión que reside en el propio contenido clasista del Estado.

Desde enero de 1959 Cuba ejercita una vía para la verdadera realización democrática, particularmente desde los 70, con el tránsito del proceso político cubano de una fase de participación popular poco institucionalizada —cuando según el vicepresidente cubano, Carlos Rafael Rodríguez, “la Revolución no ha tenido otro límite de poder que sus propias decisiones”,¹² a otra de institucionalización plena de esa participación mediante la aprobación plebiscitaria de la Constitución de la República, la instauración del Poder Popular, la descentralización administrativa del país y otras medidas hacia la ampliación de la democracia socialista. Más allá de las prácticas liberales, la democracia en Cuba asegura la permanente participación y fiscalización de las masas sobre el proceso político mediante el sufragio libre, igual y secreto; la nominación de candidatos en asambleas de masas sin interferencias, presiones externas o campañas propagandísticas en favor de uno u otro candidato; el control de los electores sobre sus representantes mediante las rendiciones de cuentas periódicas y el derecho efectivo y real a la revocación; la participación masiva de la población en la discusión de los proyectos de leyes más importantes, incluyendo aquí la propia Constitución, y en la solución de los problemas de la comunidad habitacional o laboral. Sólo en la discusión de la Constitución participaron alrededor de cinco millones de personas en unas doscientas mil reuniones, y fue aprobada finalmente en votación secreta por 5 473 485 votos de un total emitido de 5 602 973, para una participación electoral del 98% y un 97,7% de otros positivos.¹³

Al mismo tiempo, se crearon y fueron paulatinamente perfilándose otros canales de participación política mediante organizaciones políticas y de masas, tales como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), y las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), el pueblo armado como máxima expresión de su ejercicio democrático. A través de todas estas instancias las masas encontraron vías idóneas para insertarse en el quehacer político nacional, para luchar por la solución de sus problemas sectoriales en correspondencia con los intereses generales de la nueva sociedad, al mismo tiempo que la práctica política cotidiana contribuía decisivamente a la elevación de su nivel político e

¹² Carlos Rafael Rodríguez: *Letra con filo*, tomo 11. Ed. Ciencias Sociales, la Habana, 1983, p. 505.

¹³ Martha Harnecker: *Cuba ¿dictadura o democracia?.. Siglo XXI*, Editores SA. México, 1975. p. 103. Véase también la Constitución de la República de Cuba. Edición Oficial del Ministerio de Justicia. febrero de 1976.

ideológico. La participación política masiva es aquí una condición del propio avance y profundización del proceso.

Es interesante anotar que en los mismos momentos en que la participación electoral tiende a disminuir en los países caribeños, o es rebasada por acciones de masas duramente reprimidas, las últimas elecciones celebradas en Cuba registraron una participación del 98,7% de los electores en la primera vuelta y del 95,8% en la segunda, en un clima de profundo entusiasmo popular, lo que hizo afirmar al vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, el dominicano Ambriorix Díaz Estrella, que el proceso electoral cubano “se desarrolla con mayor libertad que en el resto de nuestros países”.¹⁴

Esto no significa que el proceso cubano constituya un “modelo” a calcar por los países del área. La Revolución Cubana ha evolucionado condicionada por algunos factores particulares que aceleraron y matizaron peculiarmente su desarrollo, entre ellos la permanente agresividad norteamericana y la incapacidad histórica de sectores burgueses medios para colaborar en un proyecto democrático, popular y antimperialista donde hubieran tenido un papel honorable en la tarea del desarrollo socioeconómico nacional. La creación de un clima de distensión y respeto a la autodeterminación nacional en el plano regional, sumada a la posibilidad objetiva de unir al proyecto popular a sectores medios condenados a la ruina al calor de los ajustes neoliberalizantes practicados por el gran capital y el imperialismo, crean nuevas condiciones para la instrumentación de proyectos populares alternativos a la crisis y a los avances autoritaristas y militares en el área. Sin embargo, la Revolución Cubana ofrece un plano de universalidad en el contenido básico que ha soportado la creciente participación popular en la democracia socialista: el peso decisivo de la propiedad social sobre los medios de producción, el carácter de la apropiación que permite el uso del excedente económico para la satisfacción de las necesidades crecientes de la población, la adopción de una política consecuentemente antimperialista que permita el manejo soberano de los recursos nacionales y la erradicación de las limitaciones a la independencia nacional; en resumen, el paso del poder político y militar al pueblo en firme oposición a las oligarquías locales y el imperialismo.

A pesar de su corta existencia y de las trágicas condiciones en que sucumbió ante la agresión imperialista, la Revolución Granadina arrojó importantes experiencias tales como el establecimiento de consejos parroquiales y zonales (*Parishes and zonal councils*); de organizaciones de masas tales como la

¹⁴ Cit. por Teresa Jorge: .Urnas sin soldados.. En Prisma, año 10. no. 142. junio de 1984, p. 12.

National Youth Organization y la *National Women Organization*. A la desgastada opción liberal *westminsteriana* —preconizada por quienes no dudaron en establecer allí un régimen de facto altamente represivo y apoyado en fuerzas militares extranjeras—, la Revolución opuso un nuevo tipo de democracia participativa (*Participatory Democracy*) en proceso de institucionalización, un genuino poder del pueblo basado en el consenso activo de las masas.¹⁵

El mensaje de los 80 está planteado: la lucha por la democracia en el Caribe es hoy, más que nunca antes, parte de una estrategia global antimperialista. antioligárquica y con un programa socioeconómico de fuerte contenido popular que rebasa el consabido planteamiento liberal sobre las libertades públicas formales y un ejercicio meramente jurídico de los derechos humanos, la necesidad de dar cumplimiento al mandato martiano: “para los creadores fuertes y sencillos que levantarán en el continente nuevo los pueblos de la abundancia común y de la libertad real”.

¹⁵ Cfr. Maurice Bishop: *Selected Speeches*. Casa de las Américas. la Habana. 1982